Nueva diplomacia energética y transición verde: hacia nuevos mecanismos de financiamiento

Serie Minutas Nº 90-25, 08/09/2025

Boris Lopicich

Resumen

Delegación que asiste a reunión de Women Political Leaders (Montenegro, 28-30 septiembre) solicita información sobre el tema: Nueva diplomacia energética y transición verde, incluyendo la financiación climática.

Nueva diplomacia energética y transición verde: hacia nuevos mecanismos de financiamiento

La política energética y climática mundial atraviesa un momento decisivo, en el que la transición hacia matrices limpias y resilientes se ha vuelto inseparable de la arquitectura financiera internacional. Lo que antes se discutía en torno a seguridad de suministro y cooperación técnica hoy se negocia en términos de inversiones billonarias, reglas de mercado, incentivos fiscales y mecanismos de reparto de costos y beneficios.

La nueva diplomacia energética no se mide únicamente en oleoductos, interconexiones o barriles, sino en compromisos de capital, instrumentos financieros innovadores y capacidad de orientar flujos globales hacia proyectos que reduzcan emisiones y promuevan justicia social. En este contexto, el financiamiento climático se posiciona como el eje articulador de la transición verde, pues define tanto la velocidad como la dirección del cambio, y determina quién gana y quién queda rezagado en la carrera hacia economías descarbonizadas.

Desde 2022, tras la invasión rusa a Ucrania y la crisis energética que siguió, los Estados se vieron obligados a redefinir sus estrategias, acelerando inversiones en gas natural licuado, redes eléctricas, hidrógeno verde y eficiencia. Pero al mismo tiempo la comunidad internacional asumió compromisos de largo plazo en materia climática: triplicar la capacidad renovable y duplicar la tasa de eficiencia al 2030, reducir drásticamente el metano y acordar un nuevo objetivo de financiamiento que supere los cien mil millones de dólares anuales.

Estos compromisos no son simples declaraciones, sino señales diplomáticas que guían a los bancos multilaterales, al sector privado y a los mercados financieros hacia una transformación sistémica. Lo que está en juego no es solo cumplir con la meta de 1,5 °C, sino sostener la legitimidad de un orden económico global que ya no puede basarse en subsidios a combustibles fósiles ni en la inacción frente a los desastres climáticos.

El financiamiento climático ha recorrido un largo camino desde que en Copenhague, en 2009, los países desarrollados prometieran movilizar 100.000 millones de dólares anuales hacia el mundo en desarrollo. Esa meta, incumplida durante años, recién se alcanzó en 2022 y con un leve superávit en 2023. Sin embargo, la cifra resulta exigua frente a la magnitud del desafío: organismos como la Agencia Internacional de Energía o la Iniciativa de Política Climática calculan que se necesitan al menos 4 a 5 billones de dólares anuales de aquí a 2030 para sostener la transición energética global en línea con el Acuerdo de París. El salto de escala es evidente, y la diplomacia climática se ha concentrado en diseñar mecanismos que permitan multiplicar los flujos financieros, garantizando al mismo tiempo integridad, transparencia y accesibilidad para los países más vulnerables.

El nuevo objetivo post-2025 acordado en la COP29 en Bakú se plantea como un piso de 300.000 millones de dólares anuales hacia 2035. Aunque representa un avance respecto del compromiso anterior, muchos países en desarrollo lo consideran insuficiente. La paradoja es clara: mientras los costos de inacción climática superan con creces cualquier inversión preventiva, la voluntad política de transferir recursos sigue marcada por tensiones Norte-Sur, percepciones de justicia y temores sobre competitividad. De allí que la discusión no se centre solo en montos absolutos, sino en el diseño de mecanismos financieros innovadores que puedan apalancar capital privado, reformar la banca de desarrollo y ofrecer instrumentos adaptados a realidades diversas.

Los bancos multilaterales de desarrollo han sido objeto de una presión creciente para reformarse. El G20 acordó una hoja de ruta para hacerlos “más grandes, mejores y más eficaces”, con propuestas de modificar marcos de adecuación de capital, utilizar garantías de manera más intensiva, flexibilizar los préstamos concesionales y crear vehículos de inversión que atraigan capital privado. El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, entre otros, experimentan con nuevas modalidades de blended finance, titulización de activos y capital híbrido. Estas innovaciones buscan multiplicar cada dólar público en varios dólares privados, aprovechando la demanda creciente por inversiones sostenibles. La clave está en que no se trata solo de volumen, sino de condiciones:

la concesionalidad, la facilidad de acceso y la alineación con necesidades locales marcan la diferencia entre proyectos que transforman economías y operaciones que apenas engrosan estadísticas.

El Fondo de Pérdidas y Daños, aprobado en la COP27 y operacionalizado en la COP28 con el Banco Mundial como fiduciario, refleja la tensión entre expectativas y recursos disponibles. Aunque se han anunciado compromisos por varios miles de millones, la cifra palidece ante estimaciones de que los países vulnerables podrían enfrentar pérdidas de cientos de miles de millones de dólares anuales hacia mediados de siglo. Para que este fondo sea eficaz se requiere no solo capitalización significativa, sino también gobernanza inclusiva, rapidez en la entrega y canales que lleguen al nivel subnacional y comunitario. Aquí es donde la diplomacia parlamentaria y el liderazgo político pueden presionar por mayor ambición y por mecanismos que no reproduzcan asimetrías burocráticas.

Otra pieza clave de la arquitectura financiera es el Fondo Verde para el Clima, concebido como el principal canal de financiamiento bajo la Convención. Su desempeño ha sido mixto: ha aprobado decenas de proyectos en adaptación y mitigación, pero enfrenta críticas por la lentitud de sus procedimientos y por la complejidad para acceder a sus recursos. La discusión actual se centra en cómo simplificar el acceso directo, garantizar salvaguardas sociales y ambientales y aumentar la proporción de recursos dedicados a adaptación, históricamente menos atractiva para inversionistas privados.

En paralelo, los mercados privados de capital han mostrado un dinamismo notable. El universo de bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad supera ya los seis billones de dólares acumulados, y continúa expandiéndose. A esto se suman los préstamos vinculados a desempeño ambiental, los fondos temáticos y los planes de transición de empresas que buscan alinearse con la neutralidad de carbono. Sin embargo, la credibilidad de estos instrumentos depende de la existencia de taxonomías rigurosas y estándares verificables. El riesgo de greenwashing es real y amenaza con socavar la confianza en el sistema. Por ello, la diplomacia financiera también se despliega en organismos técnicos que definen métricas, en

negociaciones sobre armonización de taxonomías y en foros donde se debate la transparencia de divulgación climática.

La innovación más llamativa en los últimos años han sido los canjes de deuda por naturaleza o por clima. Países con altos niveles de endeudamiento y activos naturales de gran valor han encontrado en este mecanismo una forma de liberar espacio fiscal y financiar conservación. Ejemplos como Seychelles, Belice y Ecuador con las Islas Galápagos[1] muestran que, con la intermediación de bancos de desarrollo y el respaldo de organizaciones de conservación, se pueden reestructurar cientos de millones de dólares de deuda, canalizando recursos hacia áreas marinas protegidas y otros fines climáticos. El potencial es enorme, aunque no exento de riesgos: la transparencia en la gobernanza y la inclusión de comunidades locales resultan indispensables para evitar percepciones de “canje desigual”.

Otro campo emergente son las asociaciones de transición justa, conocidas como JETPs por su sigla en inglés. Estas alianzas, negociadas inicialmente con Sudáfrica, Indonesia y Vietnam, movilizan miles de millones de dólares en financiamiento público y privado para acelerar la salida del carbón, al tiempo que apoyan políticas de reconversión laboral y social. Aunque su implementación ha sido más lenta de lo esperado, constituyen laboratorios diplomáticos donde se prueban esquemas de gobernanza conjunta, combinación de fuentes y condicionalidades ligadas a justicia social.

El papel del Fondo Monetario Internacional también merece atención. A través del Resilience and Sustainability Trust, el FMI ofrece financiamiento de largo plazo, con plazos de hasta veinte años y períodos de gracia superiores a una década, destinado a apoyar reformas estructurales vinculadas a resiliencia climática y transición energética. Aunque este instrumento ha despertado debates sobre la pertinencia del

[1] Caso estudio de interés sobre la materia disponible en World Bank. (2016, February 5). *Debt-for-nature swap in Seychelles supports marine conservation and climate adaptation*. World Bank. https://www.climatepolicyinitiative.org/gca-africa-adaptation-finance/case_studies/seychelles-dfc-2/. Fecha de consulta: 08-Septiembre-2025.

FMI en la agenda climática, su potencial de apalancamiento es significativo, especialmente si se coordina con otros mecanismos multilaterales.

Los mercados de carbono, tanto bajo el Artículo 6 del Acuerdo de París como en su variante voluntaria, representan otra vía de financiamiento. Tras años de estancamiento, se han aprobado reglas que permiten avanzar en la integridad y en la contabilidad de reducciones transferidas entre países. Al mismo tiempo, iniciativas como la Integrity Council for Voluntary Carbon Markets han establecido principios para etiquetar créditos de alta calidad. Si bien aún existen controversias sobre proyectos de reforestación o compensación, el hecho de contar con reglas más claras permite que empresas e incluso gobiernos contemplen estos mercados como fuentes complementarias de ingresos y de financiamiento climático.

La transición verde también se juega en el terreno de los minerales críticos, indispensables para baterías, turbinas y paneles solares. La seguridad de suministro de litio, cobre, níquel y tierras raras es hoy un tema de diplomacia de alto nivel. Pero más allá de la extracción, lo que interesa es cómo financiar cadenas de valor completas que incluyan procesamiento, reciclaje y transferencia tecnológica. Aquí aparecen esquemas de asociación público-privada, fondos de garantía y líneas de crédito preferenciales que buscan transformar países productores en polos industriales. El desafío es combinar inversión extranjera con valor local y respeto socioambiental, evitando que la transición repita las asimetrías del extractivismo tradicional.

Todo este entramado financiero tiene una dimensión social y de género que no puede ser ignorada. La transición energética implica reconversión en sectores como carbón, acero o cemento, y el diseño de mecanismos financieros debe contemplar protección social, formación laboral y oportunidades para mujeres y comunidades vulnerables. De allí la importancia de exigir a bancos de desarrollo y fondos climáticos la aplicación de marcadores de género, así como métricas de empleo y equidad en cada paquete financiero. El liderazgo de mujeres en la diplomacia financiera puede asegurar que la transición verde no sea solo tecnocrática, sino también inclusiva y justa.

En el plano regional, los Balcanes Occidentales enfrentan el reto de armonizarse con la política energética y climática de la Unión Europea. La introducción progresiva de un precio al carbono y la aplicación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono obligarán a transformar matrices energéticas aún muy dependientes del carbón. Aquí el financiamiento externo, ya sea de la UE, del BERD o de fondos climáticos, resultará decisivo para financiar reconversiones y asegurar transiciones justas. Montenegro, como país anfitrión del encuentro de *Women Political Leaders*, se encuentra en una posición clave para mostrar cómo la integración regional puede potenciar la inversión verde y reducir vulnerabilidades.

América Latina, por su parte, se proyecta como un actor relevante en la diplomacia financiera del clima. Chile, México, Colombia y otros países han puesto sobre la mesa estrategias de hidrógeno verde, explotación responsable de litio y canjes de deuda vinculados a conservación. Sin embargo, enfrentan el mismo dilema: acceder a financiamiento en condiciones favorables, superar la percepción de riesgo y evitar que sus exportaciones sufran barreras por falta de certificaciones de carbono. La región tiene la oportunidad de negociar no solo como proveedora de materias primas, sino como socia en la construcción de cadenas de valor sostenibles.

En Montenegro, la discusión sobre mujeres líderes y política global ofrece una oportunidad única para subrayar que la transición verde no es neutra al género ni a la justicia social. El financiamiento climático debe ser pensado no solo como macroeconomía, sino como herramienta para asegurar empleos dignos, proteger comunidades y garantizar que la transformación energética beneficie a toda la sociedad. Esta visión, más amplia y humana, es la que puede dotar de legitimidad a la nueva diplomacia energética y abrir paso a mecanismos de financiamiento verdaderamente transformadores.